

Estado contra guerrillas: Los casos de MLN-Tupamaros y las FARC-EP

State against guerrillas: The cases of MLN-Tupamaros and FARC-EP

José Manuel Azcona Pastor
Universidad Rey Juan Carlos
josemanuel.azcona@urjc.es

Jerónimo Ríos Sierra
Universidad Complutense de Madrid
jeronimo.rios@ucm.es

Resumen: Este trabajo que se propone a continuación explora la relación del Estado, y de sus Fuerzas Militares, con el caso de dos guerrillas de especial relevancia en América Latina: el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), en Uruguay, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en Colombia. Así, el objetivo general es el de intentar contrastar cómo fueron dos realidades por completo antónimas, si se observan las condiciones de aparición, el contexto de violencia, la respuesta militar, la longevidad e intensidad de la confrontación o el proceso de declive y transformación política. El argumento ofrecido se enriquece con una prolija revisión bibliográfica de literatura especializada y una valiosa información primaria proveniente de entrevistas en profundidad con actores protagónicos de ambos casos. También, por el uso de documentos del Archivo de Lucha Armada “David Cámpora”, ubicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, en Uruguay; o de datos utilizados del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario adscrito a la Vicepresidencia de la República en Colombia. A lo largo de estas páginas se enfatiza en la importancia de trascender de miradas reduccionistas con respecto al fenómeno de las guerrillas latinoamericanas surgidas a partir de la década de los

sesenta. Por el contrario, se destaca la relevancia de aproximaciones particulares que, más allá de los elementos compartidos, que también son de necesaria atención, ahonden en las diferentes trayectorias y sentidos de la violencia que caracterizaron a los complejos procesos de confrontación armada que surgieron continentalmente en un momento álgido de la Guerra Fría.

Palabras clave: FARC-EP, Fuerzas Militares, guerrillas, MLN-Tupamaros, violencia política.

Abstract: This paper explores the relationship between the State and military organizations, with a special focus on the case of two guerrillas of great relevance in Latin America: the Tupamaros – National Liberation Movement (MLN-T) in Uruguay and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army (FARC-EP). The aim is hence to contrast two completely antonymous realities if one considers the conditions of their emergence, the context of violence, the military response, the longevity and intensity of the intrinsic confrontation and the rate of their decline and subsequent political transformation. This position becomes further reinforced via a thorough bibliographic review and valuable primary information from in-depth interviews with first-hand protagonists and documents from the "David Campora" Archive of Armed Struggle located in the Faculty of Humanities and Educational Sciences of the University of the Republic, in Uruguay, and from the Observatory of Human Rights and International Humanitarian Law attached to the Vice-Presidency of the Republic in Colombia. Emphasis is placed on the importance of transcending reductionist perspectives with respect to the phenomenon of Latin American guerrillas emerging in the 1960s. Much to the contrary, it highlights the importance of individual approaches going beyond their shared elements -which are of equal relevance- to delve into the different trajectories and meanings of violence in these complex processes of armed confrontation that began at a critical moment of the Cold War.

Keywords: FARC-EP, Military Forces, guerrillas, MLN-Tupamaros, political violence.

Para citar este artículo: José Manuel AZCONA PASTOR y Jerónimo RÍOS SIERRA: “Estado contra guerrillas: Los casos de MLN-Tupamaros y las FARC-EP”, *Revista Universitaria de Historia Militar*, Vol. 11, N° 23 (2022), pp. 85-110.

Recibido 17/06/2022

Aceptado 19/12/2022

Estado contra guerrillas: Los casos de MLN-Tupamaros y las FARC-EP

José Manuel Azcona Pastor
Universidad Rey Juan Carlos
josemanuel.azcona@urjc.es

Jerónimo Ríos Sierra
Universidad Complutense de Madrid
jeronimo.rios@ucm.es

Introducción

Este trabajo tiene como propósito analizar el proceso de aparición y declive de dos de los grupos guerrilleros más influyentes en América Latina: el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), en Uruguay, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en Colombia. Dos estructuras armadas de referencia que, si bien aparecen a mediados de los años sesenta, en plena Guerra Fría, se inscriben en un origen y desarrollan una evolución completamente dispar. Esto, en relación con varios elementos que serán tratados a lo largo de estas páginas, como es lo referente a contexto político de aparición, longevidad, empleo de la violencia, capacidades operativas o fundamentación ideológica.

Los tupamaros emergen en un contexto democrático¹ y con un ideario fuertemente influido por la revolución cubana y los movimientos de liberación nacional de mediados de siglo.² Adecúan el sentido de la lucha armada al escenario estrictamente urbano (Montevideo)³ y sostienen un discurso ideológico pragmático y posibilista.⁴ Su vigencia como estructura político-militar, más allá de un amplio debate, es menor a una

¹ Adolfo GARCÉ: *Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973). Revisando el fracaso de la CIDE*, Montevideo, Trilce, 2002.

² Alfonso LESSA: *La revolución imposible. Los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX*, Montevideo, Fin de Siglo, 2003.

³ Jaime YAFFÉ: *Izquierda y democracia en Uruguay, 1959-1973. Un estudio sobre lealtad democrática en tiempos de la Guerra Fría latinoamericana*, Montevideo, Universidad de La República, 2016.

⁴ Jerónimo RÍOS: “Los orígenes del MLN-Tupamaros: entre el pragmatismo y la dificultad (1962-1968)”, *Izquierdas*, 50 (2021), pp. 1-29.

década (1962-1972),⁵ y la mayor parte del tiempo, exhiben una clara renuencia al empleo de la violencia.⁶ Dentro de las grandes guerrillas latinoamericanas pueden ser consideradas como la que hizo un uso más mesurado de la misma, toda vez que, por su arraigo urbano, es la estructura que más ha influido en el terrorismo revolucionario europeo a partir de 1970.

El caso de las FARC-EP es contrario. Surgen en un contexto formalmente democrático pues, en realidad, el sistema político excluía cualquier posibilidad al margen del binomio Partido Liberal/Partido Conservador.⁷ La influencia de la revolución cubana está ausente, dado que su aparición se debe a circunstancias mayormente locales, de marcada impronta agraria,⁸ y sobre escenarios en donde la autoridad del Estado resulta cuestionada.⁹ A diferencia del MLN-T, su presencia en la ciudad nunca fue significativa, con puntuales excepciones, pues su prioridad siempre fueron los emplazamientos rurales y campesinos de la periferia colombiana¹⁰. Se trata del segundo grupo armado más longevo del continente, a excepción del también colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), e hizo gala de un notable uso de la violencia. Sobre todo, entre la década de los ochenta y los 2000, hasta el punto de ser responsable de un total de 30.000 víctimas mortales dentro de un conflicto que arroja más de 215.000 muertes violentas -incluso, la reciente Comisión de la Verdad, en 2022, llega a casi duplicar esta cifra.¹¹ En su momento álgido de activismo armado, en oposición a los tupamaros, las FARC-EP se organizaron en más de 80 frentes de guerra y 18.000 efectivos, con unos ingresos económicos que, sólo con los réditos provenientes de la droga, superaban ampliamente los 1.000 millones de dólares anuales.¹²

Así, este estudio profundiza sobre esta disparidad de escenarios, mostrando cómo la amenaza guerrillera fue enfrentada de forma distinta en Uruguay y Colombia, y de qué manera es posible encontrar trayectorias opuestas. El espacio y el uso del territorio, las fuentes de financiación o las capacidades del Estado son elementos explicativos para entender la diferente longevidad de MLN-T y FARC-EP. También del modo en que finalizó en cada caso la confrontación armada. No puede obviarse del análisis la forma opuesta de recurrir a la violencia político, además de la impronta ideológica utilizada,

⁵ Clara ALDRIGHI: *La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el MLN-Tupamaros*, Montevideo, Trilce, 2016.

⁶ Documento 1 – MLN-T. Junio de 1967. Consultado del Archivo de Lucha Armada “David Campora”.

⁷ Daniel PECAUT: *Cronica de cuatro decadas de politica colombiana*, Bogota, Norma, 2006.

⁸ Eduardo PIZARRO: *Las Farc (1949-2011): de guerrilla campesina a maquina de guerra*, Bogota, Norma, 2011.

⁹ Jeronimo RIOS: *Historia de la violencia en Colombia, 1946-2020. Una mirada territorial*, Madrid, Silex, 2021.

¹⁰ Mario AGUILERA: *Las FARC: la guerrilla campesina, 1949-2010  Ideas circulares en un mundo cambiante?*, Bogota, Arfo, 2010.

¹¹ CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA: *Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Bogota, 2013.

¹² Jeronimo RIOS, *Historia de la violencia...* op.cit, p. 253 y ss.

lo cual ofrece pistas de las trayectorias políticas de cada grupo una vez que ha desaparecido su expresión militar.

La primera parte del trabajo se centra en el caso uruguayo, y muestra el contexto y los rasgos más distintivos que acompañan a la aparición del MLN-T. Esto, para posteriormente tratar su declive y los elementos que explican su fracaso militar. Lo mismo se hace con las FARC-EP, aunque con la salvedad de que estas nunca fueron derrotadas militarmente¹³ y su finalización se enmarca en un proceso de paz que finaliza en 2016. Para el estudio del caso uruguayo se recurre a documentos producidos por el MLN-T -y que están presentes en el Archivo de Lucha Armada David Cámpora, ubicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La República. También se emplean relatos provenientes de entrevistas en profundidad con protagonistas y estudiosos de la violencia política. Para el caso de Colombia se usan datos provenientes del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario adscrito a la Vicepresidencia de la República de Colombia (ODHDIH). Un centro de referencia para el estudio del conflicto armado acontecido en el país, que pudo ser consultado gracias a un permiso *exprofeso* del entonces vicepresidente, Angelino Garzón. Aparte, se integran en el análisis relatos de actores protagónicos, especialmente excomandantes de las FARC-EP, que ilustran el proceso paulatino de debilitamiento al que fue sometida la guerrilla a partir del año 2000. Se finaliza con unas conclusiones que sirven de corolario al argumentario ofrecido y presentan líneas para seguir profundizando en la comprensión de tan prolífico objeto de estudio.

Contexto de la violencia y principales rasgos del MLN-T

La aparición de los tupamaros, conocidos como MLN-T a lo largo de 1966, tiene lugar bajo una situación de normalidad democrática, aunque afectada por la profunda crisis económica que comienza a mediados de los cincuenta¹⁴ y que aviva diferentes expresiones de agitación social y movilización ciudadana.¹⁵ Un punto de inflexión considerado por la mayoría de la literatura especializada para identificar el surgimiento de este grupo armado reposa en la movilización sobre Montevideo de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), en abril de 1962.¹⁶ Este hecho conecta a diferentes personas, con marcadas posiciones ideológicas de izquierda, y dará lugar a la creación de una

¹³ Camilo ECHANDÍA e Irene CABRERA: *Madurez para la paz*, Bogotá, Universidad Externado, 2017.

¹⁴ Gerardo CAETANO y José RILLA: *Historia Contemporánea del Uruguay. De la colonia al siglo XXI*, Montevideo, Fin de Siglo, 2004.

¹⁵ Eduardo REY TRISTÁN: *La izquierda revolucionaria uruguayo, 1955-1973*, Sevilla, CSIC-Universidad de Sevilla, 2005.

¹⁶ Nicolás DUFFAU: *El Coordinador (1963-1965). La participación de los militantes del Partido Socialista en los inicios de la violencia revolucionaria en Uruguay*, Montevideo, Universidad de La República, 2008.

incipiente estructura político-militar conocida como el Coordinador, semilla embrionaria del futuro MLN-T.

Ya en ese momento destaca una figura de referencia para los futuros tupamaros: Raúl Sendic.¹⁷ Éste había interrumpido sus estudios de abogacía y había abandonado Montevideo para ir encuadrando sindicalmente a trabajadores del arroz, la lana o la naranja, sin olvidarse de los que estaban en un ámbito más precario, como era el caso de los cortadores de caña de azúcar, en Bella Unión. Junto a él, otros nombres indisolubles de la historia tupamara, como Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales, Jorge Manera, Jorge Torres o Heladio Rodríguez, comienzan a estructurar un grupúsculo, de poco más de una docena de integrantes, que bajo diferentes afinidades ideológicas toman como referente la exitosa revolución cubana de 1959.¹⁸ Eso sí, con un matiz tan distintivo como único: la reivindicación de la lucha armada desde un plano puramente urbano.¹⁹ Así lo reconoce, al ser entrevistado, el antiguo y destacado integrante tupamaro, David Cámpora:

Entonces recorren todos los montes para ver si hay posibilidad de lucha rural, porque la lucha rural era la experiencia de Cuba, *pero* nosotros no tenemos montañas, no tenemos selva, *apenas* tenemos unos *montecitos* que rodean.²⁰

Primero el Coordinador, y después, desde mediados de 1965, los tupamaros, entienden que la necesidad de estructurar una guerrilla en clave urbana debe quedar inalterada.²¹ En las *Actas Tupamaras*, de 1972, aparecen claramente estos fundamentos, los cuales colisionaban con la posición de Fidel Castro e, incluso de Régis Debray,²² al condicionar estos el éxito insurreccional a una lógica estrictamente rural. Este elemento de circunscribir la lucha armada al espacio urbano haría de los tupamaros un actor de referencia para para varios grupos violentos europeos. El propio David Cámpora narra cómo, en conversaciones con miembros de la RAF alemana (Fracción del Ejército Rojo), le hicieron saber que, a sí mismos, se definirían como «los Tupamaros de Europa»,²³ resultado de la admiración que profesaban a la guerrilla montevideana. De esta forma, y desde 1965, el MLN-T acogía todos los principios rectores de un funcionamiento

¹⁷ Para el estudio de Sendic es referencia obligada el trabajo de Samuel BLIXEN: *Sendic*, Montevideo, Trilce, 2000.

¹⁸ Jerónimo RÍOS: *Los orígenes del MLN-Tupamaros...* op. cit., p. 10.

¹⁹ Jerónimo RÍOS: “MLN-Tupamaros: génesis y evolución de la guerrilla urbana (1962-1973)”, *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, 24:50 (2022), pp.435-463.

²⁰ David CÁMPORA, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

²¹ MLN-T: *Actas Tupamaras*, Montevideo, TAE, 1972.

²² Inicialmente Régis Debray fue profundamente crítico con los tupamaros si bien, en 1972, prologa las *Actas Tupamaras* publicadas en Cuba con un alegato claramente a su favor y viabilidad.

²³ David CÁMPORA, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

estrictamente capitalino: clandestinidad, compartimentación de la información y la seguridad, y adaptación a todas las posibilidades de lucha armada que ofrecía la ciudad.

Por otra parte, los tupamaros se dotaron de una estructura orgánica que gravitaba en torno a cuatro niveles de acción y decisión: *Convención Nacional, Comité Ejecutivo, Columnas*, y dentro de ellas, *Células*. Si bien esto conduce a algunos autores a considerar una cierta mimesis respecto de los planteamientos más ortodoxos de otras formaciones marxistas-leninistas²⁴, debe relativizarse tal afirmación. Esta rigidez, en el plano ontológico de la guerrilla urbana, no era del todo cierta, pues la forma de operar siempre quedó circunscrita a las dificultades, adaptaciones y coyunturas cambiantes del momento. Además, la manera de operar eficiente en sus primeros años, en realidad, fue siempre desorganizada y lastrada por la dificultad para atraer a sus filas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad uruguaya.²⁵ En cualquier caso, es innegable la poderosa influencia que los tupamaros generaron, en particular, en estructuras armadas como las Brigadas Rojas.²⁶

El grueso de la militancia tupamara formó parte del entorno intelectual más prominente del país y uno de cada cuatro guerrilleros era mujer.²⁷ La experiencia de la lucha anticolonial en Argelia fue primacial en el MLN-Tupamaros, aunque destacados dirigentes guerrilleros reconocen otras provenientes de Polonia o Israel.²⁸ Finalmente, el radio de acción de esta organización armada, aunque limitado a la capital, incluía al área suburbana, que fue de gran valor para el desarrollo de los operativos tupamaros. Esto no quiere decir que el espacio rural no fuese tenido en cuenta. Simplemente, que no ofrecía de las ventajas que representaba en otros contextos como Cuba o Colombia. De hecho, conviene recordar cómo los tupamaros, cuando se vieron seriamente debilitados en el escenario urbano, intentan involucrar al ámbito rural, especialmente, a partir de 1971.

Así, el llamado Plan Tatú²⁹ intentaba extender el sentido de la lucha al campesinado, priorizando la construcción de *tatuceras*, esto es, excavaciones bajo tierra desde donde golpear al enemigo y volver a esconderse, tal y como hacían los miembros del *Vietcong* en la lucha contra los estadounidenses. También en Montevideo se desarrolló

²⁴ Julio BORDAS: *Tupamaros: derrota militar, metamorfosis política y victoria electoral*, Madrid, Dykinson, 2015.

²⁵ Peter WALDMAN: "How terrorism ceases: The tupamaros in Uruguay", *Studies in Conflict and Terrorism*, 34:9 (2011), pp. 717-731.

²⁶ Matteo RE: "Cómo las guerrillas metropolitanas sudamericanas influenciaron en el terrorismo europeo: praxis organizativa y un lenguaje común", *REIB. Revista Electrónica Iberoamericana*, 6:1 (2012), pp.1-29.

²⁷ Felipe AROCENA: "Violencia política en el Uruguay de los 60. El caso de los tupamaros", Documento de Trabajo 148/89, Montevideo, CIESU, 1989.

²⁸ Héctor AMODIO, entrevista de los autores, Madrid, septiembre de 2021. Efraín MARTÍNEZ PLATERO, entrevista de los autores, Montevideo, noviembre de 2021.

²⁹ Plan Tatú, junio de 1971. Archivo de Lucha Armada 'David Campora'.

esta estrategia,³⁰ de tal modo que los viernes y otros días de la semana varios tupamaros, como Efraín Martínez Platero, Lucía Topolanski o Héctor Amodio, se dedicaban a recorrer el sistema de alcantarillado para así cartografiar su recorrido e incorporarlo en el despliegue de sus acciones. Se construyeron cerca de 200 túneles urbanos donde llegaron a tener archivos, depósitos de armas, centros de atención sanitaria o fábricas de productos básicos. Asimismo, hacían escondites en los sótanos de algunas casas, llamados *berretines*, con una funcionalidad variada y en donde escondían a los secuestrados.



Imagen 1. Ejemplo de berretín tupamaro construido en las proximidades de la Cárcel de Punta Carretas, en Montevideo (Fotografía tomada por los autores en octubre de 2022).

En cualquier caso, la verdad es que los tupamaros, a diferencia de las FARC-EP, nunca llegaron a organizar un verdadero y operativo ejército, como sostiene, al ser entrevistado, Aldo Marchesi:

Una cosa es hacer acciones simpáticas, que terminan denunciando las financieras [...] Pero el punto es hacer la revolución en términos militares, construir un ejército. Y eso implica un desarrollo militar al cual no llegaron nunca. Nunca

³⁰ Juan AVILÉS, José Manuel AZCONA y Matteo RE: *Después del 68: la deriva terrorista de Occidente*, Madrid, Sílex, 2019.

podieron llegar [...] Básicamente lo que ellos llaman militarización es el momento en el cual empiezan a enfrentarse más directamente con el ejército.³¹

Sus orígenes bajo un contexto plenamente democrático, el sentido mismo que se confería a la guerrilla urbana, la inspiración adaptativa y pragmática de la revolución cubana, o la misma dificultad de disputar el poder al Estado por la vía violenta en un escenario como el montevideano diferente al caso colombiano visto a continuación-, no se trataba del cúmulo de factores más propicio para aspirar al sueño de la revolución social. No obstante, también es cierto que la influencia de los acontecimientos de 1968,³² fuertemente espoleados por movilizaciones obreras y estudiantiles, sumados a un contexto de erosión política, tras la llegada de Jorge Pacheco a la presidencia, ofrecieron elementos más favorables para que los tupamaros confiaran en la viabilidad de su proyecto insurreccional.

Empero, antes o después, los tupamaros debían enfrentar un punto de inflexión en su trayectoria revolucionaria: pasar de la propaganda al accionar violento. Así, aunque desde el comienzo hay una clara renuencia al uso de la violencia y del terrorismo, contraviniendo los mismos postulados cubanos, desde 1970 los hechos se tornan drásticamente.³³ Las acciones armadas se intensifican y también lo hace la respuesta del Estado.³⁴ Las detenciones, incautaciones y operativos en un marco de continuo estado de excepción dan paso a una paulatina desnaturalización de los criterios de incorporación, organización y actuación. Muchas decisiones pasan a ser adoptadas bajo criterios de autonomía, inexperiencia y precipitación. Se trata de una situación en la que la guerra frontal contra el Estado apenas se sostiene a lo largo de tres años. Esto, en parte, es producto de una correlación de fuerzas claramente desfavorable para un grupo que nunca estuvo en condiciones materiales de derrotar al Estado, con apenas 1.000 militantes hacia finales de 1970, de los cuales la gran mayoría carecía de cualquier tipo de formación militar.

Relacionado con lo anterior, la mayor parte de las operaciones armada del MLN-T se suceden entre 1969 y 1972. Esto bajo un total de 32 ataques a propiedades, 45 atentados, 50 actos de propaganda ilegal, 7 fugas, 134 robos y 23 secuestros o tentativas de secuestro, además de otras muchas acciones llevadas a cabo por grupos afines y precursores como el Coordinador, la Organización Popular Revolucionaria 33 orientales (OPR-33), las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO) o terceros grupúsculos incontrolados.³⁵ Lo cierto es que, aunque el número de muertos no fue

³¹ Aldo MARCHESI, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

³² Vania MARKARIAN: *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2012.

³³ Clara ALDRIGHI: op.cit., p. 11.

³⁴ Jerónimo RÍOS: *MLN-Tupamaros: génesis y evolución...*, op.cit., p. 454.

³⁵ Eduardo REY TRISTÁN, op. cit., p. 332.

demasiado elevado, terminaría siendo de 132 fallecidos.³⁶ Una cifra, de la cual el MLN-T es responsable de un total de 66 muertes, como apuntaba un editorial del diario montevideano de *El País* en 2017,³⁷ aun cuando otros trabajos de referencia académica, como el de Rey Tristán, lo reduce a 41 muertes directamente asociadas a la guerrilla.³⁸

El MLN-T frente al mazo de los militares y el cerco castrense

El proceso de relativo auge y popularidad del MLN-T transcurre hasta 1968, llegándose a conocer como la guerrilla *Robin Hood*, resultado de sus robos a entidades bancarias, la difusión de ilegalidades o el despliegue acciones en favor de algunos barrios populares.³⁹ En un reportaje publicado por la revista *Al rojo vivo*, en 1969, se definían sus miembros a sí mismos como indestructibles, aunque las cosas empezaron a cambiar de forma radical con la entrada en acción del Ejército de la República Oriental de Uruguay.⁴⁰

El presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1972), ante la escalada de violencia ejercida por los tupamaros, consideró que el método policial se quedaba corto para reprimir la acción de los guerrilleros y, por ende, requirió la participación de las Fuerzas Armadas a partir de 1971. De igual forma, su sucesor, Juan María Bordaberry Arocena, presidente constitucional entre 1972 y 1973, y dictador entre 1973 y 1976, sería un actor clave en la derrota armada del MLN-T.⁴¹ En dicho proceso tampoco se puede obviar la participación intensa de la que gozaron grupos paramilitares de extrema derecha, como Defensa Armada Nacional y Comandos Caza-Tupamaros.

A modo de respuesta, el bautizado como Plan Hipólito de los tupamaros, impulsado el 14 de abril de 1972, tuvo como principal propósito atacar a estos grupos,⁴² si bien, para entonces, la organización tupamara *de facto* estaba prácticamente desarbolada. Sus más significativos líderes o estaban presos o se encontraban abanderando el fallido proyecto que supuso la Junta de Coordinación Revolucionaria, la cual intentaba integrar experiencias insurreccionales al borde de la derrota, como el Ejército de Liberación Nacional boliviano, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y los propios tupamaros. Ello, a expensas de depender del único grupo con capacidad económica y armada hasta 1976: el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo argentino.⁴³

³⁶ *Ibidem*, p. 341.

³⁷ *El País*, Montevideo, 10 de octubre de 2017, Editorial “Víctimas de los Tupamaros”.

³⁸ Eduardo REY TRISTÁN: *op.cit.* p. 341.

³⁹ Gerardo TAGLIAFERRO: *Adiós Robin Hood. 40 años después*, Montevideo, Fin de Siglo, 2008.

⁴⁰ Patricia PINTA: “Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)”, en Jerónimo RÍOS y José Manuel AZCONA, *Historia de las guerrillas en América Latina*, Madrid, Catarata, 2019.

⁴¹ Alfonso LESSA: *Estado de guerra. De la gestación del golpe de 1973 a la caída de Bordaberry*, Montevideo, Fin de Siglo, 1996.

⁴² Alain LABROUSSE: *op.cit.*, pp. 110-114.

⁴³ Francesca LESSA: *Los juicios del Cóndor. La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur*, Montevideo, Taurus, 2022.

Desde la llegada de Pacheco se normalizó el uso del estado de excepción y fueron detenidos miles de ciudadanos, además de destruirse y desmantelarse las más importantes *tatuceras*, a partir de 1971. El recurso continuado de la tortura física resultó un factor decisivo en este recorrido. De acuerdo con Bordas,⁴⁴ los simulacros de fusilamiento, las descargas eléctricas a los reos, los ahogamientos continuos y otras prácticas macabras fueron del todo comunes. Alcanzados estos umbrales de violencia gubernamental, se generalizó un efecto disuasorio de la actividad rebelde, lo cual provocó un claro descenso de la protesta y la movilización ciudadana. Por otro lado, el MLN-T subestimó el poderío militar uruguayo, tal y como en cierta manera sucederá en Colombia a partir del año 2000. Máxime cuando sus militantes, pletóricos de ilusión o idealismo, propio de jóvenes universitarios o de instituto de aquella época, carecían de estrategia y disciplina bélica. Y les faltaba, aún más, el armamento sofisticado y moderno que requería la empresa revolucionaria.⁴⁵ Esto, aunque en la fase de propaganda no había sido necesario, en el escalamiento de la violencia devenía como un factor fundamental, como en cierta manera se desprende del Documento 5, elaborado por el MLN-T en la prisión, a finales de 1970.⁴⁶ Además, para ese año la opinión pública uruguaya había rebajado su empatía societaria hacia este grupo guerrillero, sobre todo, por el recurso de la violencia que se había instaurado en la acción insurgente, tal y como sucedía con algunos casos de secuestro o, incluso asesinatos, como el del peón rural, Pascacio Báez, a finales de 1971.

Todo lo anterior contribuyó a generar un mayor grado de aislamiento popular, que terminó por perjudicar notablemente su posición defensiva frente a los militares uruguayos. El propio sistema institucional democrático limitaba, además, que las clases medias adoptasen una posición de apuntalamiento total y eterno del MLN-T, de forma que la tan ansiada sublevación masiva del pueblo revolucionario no llegaba —ni llegaría— nunca.⁴⁷ Algunos autores consideran que el uso cada vez más contundente de la derrota política ayudó a la caída final del movimiento tupamaro,⁴⁸ que sería definitiva con el golpe de Estado de Bordaberry y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en junio de 1973.

Siguiendo con el hilo interpretativo de lo expuesto hasta el momento, una de las razones fundamentales, en sintonía con Aldrighi,⁴⁹ reposa en que la caída del MLN-T fue debida, principalmente, a la neta superioridad de la estrategia y recursos bélicos de los militares. Sostiene la reconocida historiadora que la ilusión por cambiar la sociedad local y el mundo en su máxima dimensión no era posible (si se apuesta por la violencia política) con el concurso de las palabras únicamente. Y aquí la desventaja era total. En

⁴⁴ Julio BORDAS: op.cit., pp. 79-80.

⁴⁵ Ibidem, p. 87.

⁴⁶ Documento 5 – MLN-T. Diciembre de 1970. Archivo de Lucha Armada ‘David Cámpora’.

⁴⁷ Horacio SANGUINETTI, entrevista de los autores, Montevideo, diciembre de 2021.

⁴⁸ Alfonso LESSA: *Estado de guerra...*, op.cit., p. 32.

⁴⁹ Clara ALDRIGHI, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

la misma línea se expresa otro líder tupamaro, Jorge Zabalza,⁵⁰ y los profesores Jaime Yaffé⁵¹ y Aldo Marchesi.⁵²

Uno de los errores más graves que cometieron los guerrilleros fue el ataque a la casa del general Gravina, el 18 de mayo de 1972. Buscaban atacar contra el referido militar, pero al final cayeron los componentes de su patrulla de guardia, la cual estaba compuesta por cuatro soldados. Esta ejecución fue el desencadenante absoluto de la furia de las Fuerzas Armadas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad junto al Ejército uruguayo arrestaron, en junio de 1972, a 402 miembros del MLN-T y mataron a cinco más en diferentes operativos. Para el 20 de septiembre de aquel año, 2.552 supuestos tupamaros —pues las cifras reales eran mucho menores— habían sido capturados y la mayor parte de los líderes estaban presos.⁵³ Los guerrilleros respondieron atacando vehículos e instalaciones oficiales, perpetraron cuatro asesinatos, además de asaltar más de setenta edificios públicos y residencias personales. Tales acciones tienen que ver con el hecho por el cual el MLN-T consiguió infiltrar a alguno de sus militantes en la Policía y el Ejército.⁵⁴ Igualmente, se intentó fortalecer el aspecto organizativo,⁵⁵ aunque la realidad de las circunstancias no hizo sino debilitarlo, obligando a una continua readaptación de postulados tales como la organización laberíntica, la compartimentación de la seguridad o la estructuración en unidades mínimas de acción, que en suma favorecieron cierta capacidad de resistencia, al menos, hasta 1971.⁵⁶

Como la policía y los militares de aquel tiempo practicaban la tortura de forma sistemática, cuando apresaban a un miembro del MLN-T éste, en realidad, solo podía delatar (al menos en un escenario teórico) a los miembros de su unidad combativa más inmediata, y que, en el mejor de los casos, quedaba formada por entre cinco y siete miembros, con un jefe de célula. Cada una de ellas funcionaba como un núcleo democrático, en la toma de decisiones, pero muy jerarquizado y en el cual, en caso de urgencia o estrategia local, elegía su responsable.⁵⁷ Para normalizar esta contradicción, ya se apuntó con anterioridad, se fijó una asamblea general, conocida como Convención Nacional, cuya celebración debía ser anual, aunque por la propia clandestinidad, apenas pudo reunirse en dos ocasiones.⁵⁸ En cualquier caso, la organización tuvo sus preferencias en cuanto a la edad (30-35 años), prefiriendo los militantes solteros, sin cargas

⁵⁰ Jorge ZABALZA, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

⁵¹ Jaime YAFFÉ, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

⁵² Aldo MARCHESI, entrevista de los autores, Montevideo, julio de 2017.

⁵³ Pablo BRUM: op. cit., p. 324.

⁵⁴ Eduardo REY TRISTÁN: op.cit., p. 141.

⁵⁵ Documento 4 – MLN-T. Enero de 1969. Archivo de Lucha Armada ‘David Campora’.

⁵⁶ Miguel MADUEÑO: “MLN-Tupamaros y el nacimiento de la guerrilla urbana”, en Jose Manuel AZCONA y Majlinda ABDIU (eds.), *El sueno de la revolucion social. Contracultura, cancion protesta y kalashnikov*, Granada, Comares Historia, 2020, p. 5.

⁵⁷ Eduardo REY TRISTAN: op.cit., p. 141.

⁵⁸ Antonio MERCADER y Jorge VERA: *Los Tupamaros. Estrategia y accion*, Barcelona, Anagrama, 1970.

familiares y dotados de capacidades que le habilitasen en «disciplina, orden, organización, jerarquía, técnica, dureza física y obediencia».⁵⁹

Aun en los estertores del MLN-T, y muy avanzado su proceso de debilitamiento, sus integrantes mantuvieron las exigencias de la compartimentación, custodiando los documentos importantes en portafolios o carpetas de rápida evacuación para, en caso de persecución militar y/o policial,⁶⁰ evitar capturas e incautación de información. Esto se hizo extensivo a otros aspectos, como el buen uso del teléfono o el deber conducir con cuidado para evitar problemas con la policía de tráfico. Lo cierto es que su vida como revolucionarios terminó siendo muy austera y quedó muy bien resumida en la Circular 3, Título IV Estructura y Funcionamiento, VI Seguridad y VII Disciplina.⁶¹ En todo caso, el Ejército y la Policía de Uruguay conocían a la perfección la red de túneles urbanos, su ubicación en las cloacas o las idas y venidas de los militantes gracias a una red experta de seguimiento e infiltraciones que finalmente consiguieron introducir en la organización, a partir de finales de 1971.

La optimización de las prácticas abusivas contra los detenidos permitió conseguir una información valiosa de individuos o células del MLN-T que contribuiría a su derrota final, en 1972. En realidad, los tupamaros nunca se organizaron para proteger la democracia contra un siempre presente golpe de Estado, en tanto lo que ellos denominaban democracia burguesa no formaba parte de su cosmovisión política.⁶² Intentaron llevar sus acciones hasta el extremo, favoreciendo de algún modo, y dado el contexto regional, la entrada del mismo Ejército al que declararon la guerra en Paysandú, a comienzos de 1972. En otras palabras, es falso que los militares dieran el golpe de Estado contra los tupamaros, puesto que en 1973 la práctica totalidad de estos estaban muertos, exiliados o encarcelados.

En conclusión, los militares ya habían vencido un año antes, en septiembre de 1972, también gracias a los excesos provenientes de los ya citados escuadrones de la muerte que siguieron en este país al calor del llamado Plan Cóndor para terminar con el supuesto comunismo zonal y que propició las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile al amparo y protección de Estados Unidos.⁶³ Tal y como se puede observar en diferentes documentos del *National Archives and Records Administration* y del *National Security Archive* de Estados Unidos, los asesinatos de miembros tupamaros a manos de estos escuadrones de la muerte se encuentran ampliamente datados, por

⁵⁹ José Manuel AZCONA y Miguel MADUEÑO: “Manuales y precisas instrucciones para la praxis del perfecto guerrillero. El MLN-Tupamaros”, *Revista de Pensamiento Estratégico y de Seguridad CISDE*, 7:1 (2022), pp. 9-23.

⁶⁰ Documento 1 – MLN-T. Junio de 1967. Archivo de Lucha Armada “David Campora”.

⁶¹ Omar COSTA: *Los Tupamaros*, Ciudad de Mexico, Ancho Mundo, 1971.

⁶² Julio BORDAS: op. cit., p.8.

⁶³ José Manuel AZCONA y Matteo RE: “Meccanismi di radicalizzazione politica all’interno dei Tupamaros uruguayiani e dei Montoneros argentini: contatti, influenze e guerriglia urbana”, *Nueva Rivista Storica*, 98:1 (2014), pp. 225-265.

ejemplo, para el caso de Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Existen evidencias que remontan su activismo a la década de los sesenta. Su existencia e importancia para la derrota del MLN-T no es baladí, a la vez que era conocida por la misma guerrilla, la cual, motivó el secuestro, el 24 de febrero de 1972, de uno de sus reconocidos integrantes, Nelson Bardesio. Una vez que este fue torturado por parte de la guerrilla, confesó que tales escuadrones operaban parapolicialmente y se encontraban dotados armamentísticamente y formados en Argentina y Brasil. Con su testimonio, Bardesio llegaría a reconocer cómo estos grupos parapoliciales y paramilitares habían sido los responsables de la detonación de varias bombas en los domicilios de los abogados defensores de los militantes del MLN-T, aceptando incluso el haber participado en el asesinato y desaparición del cadáver de Héctor Castagnetto, estudiante de Agronomía y miembro del MLN-T, en la bahía de Montevideo, el 17 de agosto de 1971.

Hechos como el narrado condujeron a que la confrontación armada virase hacia otros términos. Desde abril y mayo de 1972 la guerra total y su suerte estaban echadas, y la reacción del Estado no se hizo esperar. Las detenciones masivas y los abusos policiales y militares, a partir de ese momento, se multiplicarían de forma exponencial, teniendo como corolario, en 1973, el golpe de Estado de Julio María Bordaberry, con el que se terminaría por sentenciar el sueño de la revolución social del MLN-T.

Contexto de la violencia en Colombia y principales rasgos de las FARC-EP

El conflicto armado colombiano tiene su origen, como en el caso uruguayo, en la convulsa década de los años sesenta. Un período fuertemente influido por la Guerra Fría, el generalizado colapso de las democracias y la consolidación de los cimientos de la lucha anticomunista a través de la conocida como Doctrina de la Seguridad Nacional. Lo anterior, especialmente, por el carácter emulador que inspira la revolución cubana de 1959 en grupos como los tupamaros, pero también en guerrillas colombianas como el ELN.⁶⁴

En el plano doméstico, Colombia se hallaba en un proceso de marcada convulsión política y agitación social. Desde finales de los años treinta ya se habían dado movilizaciones campesinas que reclamaban mayor justicia social y acceso a la tierra, visto el escaso alcance de la «revolución en marcha» impulsada por el presidente López Pumarejo.⁶⁵ A cuatro gobiernos continuados de impronta liberal les sucede el ultraconservador Mariano Ospina, quien vence en las elecciones presidenciales de 1946. Tras estas se instaaura un clima de altísima conflictividad social y continuos enfrentamientos entre la

⁶⁴ Jerónimo RÍOS: “MLN-Tupamaros y su relación con el entorno latinoamericano (1962-1973)”, *El Futuro del Pasado*, Avance en línea (2023), 1-35; y Jerónimo RÍOS: *Historia de la violencia en Colombia...*, op.cit., p. 63.

⁶⁵ Catherine LEGRAND: *Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950*, Bogotá, Centro, 1988.

fuerza pública y la ciudadanía, cuyo punto álgido fue el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948.⁶⁶ Este acontecimiento, conocido vulgarmente como *El Bogotazo*, teñirá de rojo monocolor tres cuartas partes del territorio colombiano,⁶⁷ instaurando un periodo de guerra civil partidista, conocido como La Violencia. En él, sólo entre 1948 y 1953, serán contabilizadas más de 180.000 víctimas mortales. A éste le sucederá una dictadura militar (1953-1957) que sólo consigue una pacificación parcial del país, y que queda relegada por el retorno de un sistema formalmente democrático conocido como el Frente Nacional. Su principal característica es la alternancia, cada cuatro años, y al menos por cuatro periodos presidenciales, de los dos partidos hegemónicos: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Dos formaciones que dominarán y limitarán los extremos de la democracia colombiana durante más de dos décadas.⁶⁸ Esto sobre unos términos muy diferentes a los de Uruguay, que acogerán la proliferación de multitud de actores armados, como grupos paramilitares, varias guerrillas y cárteles de la droga.

A mediados de los sesenta, por ende, el Estado colombiano es una democracia secuestrada por un bipartidismo excluyente, pero también es un Estado de mínimos en lo que a satisfacer necesidades de su ciudadanía, más allá de los principales centros urbanos del país, se refiere.⁶⁹ Esto, alimenta la eclosión de pequeños grupos insurgentes, ya sea con tradición agrarista y radical, heredera de las guerrillas campesinas liberales de la década anterior (FARC, 1964); vocación guevarista e inspiración cubana sobre el eje Barrancabermeja-San Vicente del Chucurí (ELN, 1965); o emulación maoísta en las regiones del Alto Sinú y San Jorge (Ejército Popular de Liberación, 1967). No obstante, tres grupos surgidos sobre enclaves muy periféricos, escasamente poblados y en donde la presencia institucional del Estado brilla por su ausencia.⁷⁰

Durante los años setenta y ochenta, el conflicto armado incorpora nuevos actores. Desde finales de los setenta ganan peso específico los grupos paramilitares, inicialmente vinculados al sindicato de ganaderos y agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM),⁷¹ y los primeros narcotraficantes, organizados mayormente en torno a los cárteles de Cali y Medellín a lo largo de la década de los ochenta. También las diferentes guerrillas van consolidando sus espacios territoriales, sus bases de apoyo y sus redes de financiación, sumándose otras estructuras emergentes como el M-19 (1974) o la Guerrilla

⁶⁶ Daniel PÉCAUT: *Orden y violencia: Colombia, 1930-1953*, Medellín, EAFIT, 2011.

⁶⁷ Germán GUZMÁN et al.: *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*, Bogotá, Tercer Mundo, 1962.

⁶⁸ Daniel BUSHNELL: *Colombia, una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, Norma, 1996.

⁶⁹ Francisco GUTIÉRREZ SANÍN: *El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*, Bogotá, Universidad Nacional, 2014.

⁷⁰ Armando BORRERO: *De Marquetalia a las Delicias*, Bogotá, Planeta, 2019.

⁷¹ Carlos MEDINA: *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá"*, Bogotá, Documentos Periodísticos, 1990.

Indigenista Quintín Lame (GIQL), en 1983.⁷² Aspectos, en suma, que, desplegados en los años y décadas posteriores, harán del conflicto armado interno colombiano el más longevo, el más violento y el más complejo, por la pluralidad de actores involucrados.⁷³

El trasfondo de todo lo señalado es el de un Estado con más territorio que soberanía y sin capacidad para dialogar con los grupos armados, dada su debilidad como actor negociador para comprometer su institucionalidad, ya sea por falta de voluntad de las partes, por la carencia de herramientas gubernamentales o por la erosión de las relaciones cívico-militares.⁷⁴ En la segunda mitad de los años ochenta, con el narcotráfico como principal motor de la violencia, pero con otras expresiones no menos relevantes en forma de acciones guerrilleras, Colombia se erige como el país más violento del mundo en cómputo de homicidios, y ejemplifica la noción de narcoestado.⁷⁵ Si Cali en 1990 presenta una cifra que se aproxima a los 100 homicidios violentos cada 100.000 habitantes, urbes como Medellín llegan a las 400 muertes violentas cada 100.000 habitantes,⁷⁶ alimentando un escenario que nada tiene que ver con el presentado en Uruguay.

La década de los noventa no es mucho mejor. Se desactivan los cárteles Medellín (1993) y Cali (1996), y bajo la nueva Constitución de 1991 se consagra la desmovilización de algunos grupos guerrilleros como el M-19, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Autodefensa Obrera (ADO), la GIQL o buena parte del EPL. Sin embargo, el sustrato de ingentes recursos que provienen de la financiación ilícita se mantiene inalterado y buena parte del vacío de poder de los cárteles del narcotráfico es cooptado por la guerrilla y por el paramilitarismo. A pesar de los sucesivos esfuerzos de las presidencias de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), con procesos de diálogo, en el primer caso con las FARC-EP en Tlaxcala y Caracas, y en el segundo, con el ELN en España y Alemania, el conflicto armado con las guerrillas y los grupos paramilitares no hace sino incrementarse.

Habida cuenta del contexto presentado, si bien las FARC-EP y el MLN-T comparten unos inicios precarios, algo extensible a cualquier experiencia guerrillera latinoamericana, es posible encontrar muchas más diferencias que similitudes. La acumulación de recursos económicos y militares para enfrentar al Estado fueron mucho más difíciles para el caso de la guerrilla colombiana, en buena parte, por su origen periférico y la ausencia estatal para con un marco de confrontación armada, el cual era mucho más evidente y directo en el caso uruguayo. Buena prueba de ello se constata con el dato que

⁷² Darío VILLZAMIZAR: *Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes*, Bogotá, Debate, 2017.

⁷³ Jerónimo RÍOS: *Historia de los procesos de paz en Colombia (1982-2022). Élités políticas, Fuerzas Militares, guerrillas y paramilitarismo*, Granada, Comares, 2023.

⁷⁴ Eduardo PIZARRO: *Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia*, Bogotá, Debate, 2017.

⁷⁵ Germán PALACIO: *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*, Bogotá, ILSA-CEREC, 1990.

⁷⁶ Sayra RODRÍGUEZ GONZALEZ: ““La ciudad más insegura del mundo”: homicidio y crimen en Bogotá, 1988-1994”, *Revista Criminalidad*, 59:2 (2017), pp. 49-64.

ofrece Aguilera,⁷⁷ cuando reconoce cómo entre 1968 y 1982, las FARC, que a partir de la VII Conferencia Guerrillera de 1982 incorporan la proclama Ejército del Pueblo, promedian menos de tres acciones armadas anuales. Asimismo, con un grueso que se aproxima a los 1.000 combatientes, aun cuando carecen de implantación nacional, consiguen fortalecer su posición en enclaves al sur de Bogotá, en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Meta y Caquetá, además de en las regiones del Urabá y el Magdalena Medio. Baste recordar que los tupamaros, por ejemplo, para 1970, ya habían logrado, en sólo unos pocos años, alcanzar el millar de integrantes y confrontar directamente con el Estado.

A diferencia de lo que sucede con el ELN, las FARC-EP no son una guerrilla con una gran influencia de Cuba. Su nacimiento es eminentemente agrario, en contextos profundamente alejados de los centros decisorios del país y de los acontecimientos más relevantes de la agenda internacional. Su ortodoxia ideológica, aun cuando tiene una clara connotación comunista más que liberal,⁷⁸ se fundamenta sobre la base de las contradicciones y carencias estructurales de donde surge la guerrilla, sin incorporar elementos foráneos. Esta suerte de *parroquialismo* ideológico se observa en que las FARC-EP nunca tuvieron un gran referente teórico, como pudo ser Camilo Torres para el ELN, más allá de las aportaciones del dirigente guerrillero Jacobo Arenas y la modulación ideológica y discursiva que, sobre todo, se desarrolla en la década de los ochenta. He aquí, por ende, otra diferencia con respecto a los tupamaros, pues su renuencia para asumir los postulados cubanos es similar a la asunción del marxismo-leninismo, en tanto que predomina en la guerrilla uruguaya un componente transversal, más pragmático y eminentemente nacional, que no colisiona, a diferencia de las FARC-EP, con su notable conocimiento del contexto internacional del momento.⁷⁹

Finalmente, las FARC-EP comienzan a consolidarse como el enemigo de referencia del Estado colombiano una vez tiene lugar la recién mencionada VII Conferencia Guerrillera (1982). Ésta diseña un marco de fortalecimiento económico y territorial inspirado en lo que se define como Nueva Forma de Operar y que promueve quien será la futura referencia militar de la guerrilla: Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”. Se trata de movilizar guerrillas móviles para actuar sobre un solo frente y dispersarse bajo una lógica de *hit and run*, aspirando, en el corto plazo, a ir relegando paulatinamente al Estado de aquellas áreas de control donde su presencia resulta más precaria. Un aspecto que se plasmará con relativo éxito a lo largo de la década de los noventa.

⁷⁷ Mario AGUILERA: op.cit., p. 88.

⁷⁸ Generalmente se reconoce que la mayor influencia proviene de las guerrillas liberales, si bien los trabajos ya citados de Pizarro (2011) y Ríos (2021) muestran todo lo contrario.

⁷⁹ Jerónimo RÍOS: *MLN-Tupamaros y su relación con el entorno...*, op.cit., p. 7.

La derrota estratégica de las FARC-EP: dos décadas de transformaciones en la violencia

Una mirada amplia del conflicto armado impide reducir la derrota estratégica de las FARC-EP, y la correspondiente ausencia de una victoria militar en favor del Estado, a un lapso tan breve a como sucedió con los tupamaros. Mientras que el ciclo de violencia uruguayo apenas abarcaría una década (1962-1972), con una derrota militar acontecida en apenas menos de un año, el caso de las FARC-EP es totalmente diferente. Primero, porque es resultado de las transformaciones que se producen a lo largo de las presidencias de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), y que dan lugar a un cambio en la correlación de fuerzas que termina siendo favorable al Estado. Segundo, porque nunca termina llegar una derrota militar de la guerrilla, sino más bien una derrota estratégica. Las FARC-EP, por cómo evoluciona el conflicto armado durante este tiempo, terminan aceptando la necesidad de un Acuerdo de Paz que, suscrito en noviembre de 2016, permite desmovilizar a sus más de 7.000 combatientes activos en ese momento.

El proceso del Caguán: una *reoxigenación* para el Estado

Las FARC-EP llegaban a finales de los noventa en una situación de esplendor. Con más de 12.000 integrantes, repartidos en 60 frentes de guerra y más de 250 municipios, de los poco más de 1.100 que integran Colombia, experimentaban una clara tendencia de expansión. Además, ya en los últimos años de la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), y con el impulso de la VIII Conferencias Guerrillera de 1993, habían logrado ases- tar varias derrotas militares al Ejército colombiano. Sólo en seis operativos guerrilleros: Puerres (1996), Las Delicias (1996), La Carpa (1996), Patascoy (1997), El Billar (1998) y Miraflores (1998) la guerrilla inflige 159 muertes de soldados, así como el secuestro de otros casi 300.⁸⁰

Las elecciones presidenciales de 1998 gravitaron sobre la necesidad de abrir un marco de diálogo con la guerrilla, vista la situación de marcada debilidad en la que se encontraba el Estado colombiano, tal y como reconoce, al ser entrevistado, quien fuera Alto Comisionado para la Paz entre 1998 y 2000, Víctor G. Ricardo:

La guerrilla tenía 3.600 secuestrados y 500 soldados y policías capturados tras Patascoy, Las Delicias y El Billar. Había cerca de 200 municipios sin presencia de fuerza pública [...] y no había un Ejército profesional. Su dotación era precaria [...] Si usted me pregunta, ¿era el momento propicio para una negociación? Yo le digo, desde el punto de vista militar para la guerrilla no, para el

⁸⁰ Camilo ECHANDÍA: “El conflicto armado colombiano en los años noventa. Cambios en las estrategias y efectos económicos”, *Colombia Internacional*, 49-50 (2000), pp. 117- 134.

Estado era fundamental. Pero fundamental era también buscar oxigenar el Estado porque si no si se hubieran tomado el poder [...] Las FARC estaban convencidas de que se iban a tomar el poder.⁸¹

Tal circunstancia ocupó la mayor parte del gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana, quien al poco tiempo impulsó el que sería conocido como proceso de paz del Caguán. Se trataba del intento de acercamiento con la guerrilla más serio desde que lo intentase el también mandatario conservador Belisario Betancur en 1984. Sin embargo, las condiciones no serían las mejores para aspirar a un marco de entendimiento en aras de deponer las armas. En primer lugar, el intento de diálogo transitaba sin un cese de las hostilidades, las cuales, más bien, se intensifican entre 1999 y 2002, también, por la situación en que quedaba la guerrilla del ELN y, muy especialmente, un proyecto paramilitar en auge en toda la región Caribe y los departamentos de Antioquia y Santander. Además, las relaciones cívico-militares estaban erosionadas resultado de que una condición para que comenzase el proceso había sido, de parte de las FARC-EP, disponer de una zona desmilitarizada de 42.000 km² que afectaba a los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Asimismo, la agenda de negociación era tan inabarcable como problemática. Incluía 12 puntos y 48 subpuntos que trataban temas tan dispares como reformas políticas, recursos naturales, reforma de las Fuerzas Militares o relaciones internacionales, a la vez que obviaba aspectos como la entrega de armas. Por si fuera poco, la interlocución tenía lugar con los perfiles más beligerantes de las FARC-EP, como eran “Mono Jojoy”, “Raúl Reyes”, “Fabián Ramírez” o “Joaquín Gómez”, mucho más militares que políticos.⁸² Además, el hecho de que se negociase en Colombia, aunque confirió gran visibilidad a la guerrilla, favoreció una acentuada exposición mediática, que contravenía la prudencia y discreción necesaria en todo proceso de diálogo de estas características. La percepción victoriosa que para sí tenían las FARC-EP en ese momento queda contemplada en el relato de la excomandante de la guerrilla, “Karina”:

Hacia 1998 en las FARC seguíamos pensando en tomar el poder. Yo vi dos ocasiones en la que eso pudo haber pasado. La primera, durante el auge de la UP y la segunda, entre 1996 y 1998 cuando tras las victorias militares, somos conscientes de que podemos vencer la guerra [...] Cuando nos sentamos con Pastrana estábamos cerca del golpe final [...] De hecho, les decíamos que no se trataba de negociar nada. Era un diálogo [...] Íbamos a ganar.⁸³

⁸¹ Víctor G. RICARDO, entrevista de los autores, Madrid, junio de 2019.

⁸² Jerónimo RÍOS: *Historia de la violencia...*, op.cit., p. 103.

⁸³ “KARINA”, entrevista de los autores, Medellín, mayo de 2015.

Tras 1.139 días nada se avanzó y el proceso de diálogo sirvió para alimentar una suerte de «paz armada» en la que tanto guerrilla como gobierno impulsaron transformaciones en aras de un futuro escalamiento de la violencia. Como reconoce Pizarro, las FARC-EP utilizaron la zona desmilitarizada para «adelantar la guerra contra el Estado, para esconder secuestrados, para adiestrar en sus escuelas militares a los combatientes a todos los niveles, y para aprender nuevas técnicas de guerra y utilización de explosivos». ⁸⁴ De hecho, después de los tres años de negociaciones sus frentes se elevaban a 70 y se aproximaban a los 18.000 efectivos. ⁸⁵ Igualmente, entre 1999 y 2002 llegan a protagonizar más de 1.200 acciones armadas y superan la presencia territorial en más de 300 municipios. ⁸⁶ Sin embargo, esta misma lógica, que indudablemente ayuda a *reoxigenar* las Fuerzas Militares colombianas, se aprecia en el Estado. Durante el proceso de negociación el gasto militar se incrementa del 2.9% al 3.5%. Asimismo, se invierten ingentes esfuerzos en modernizar la fuerza pública, especialmente, en lo que respecta a equipamiento, logística y coordinación. Por si fuera poco, se suscribe un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que dejará, a lo largo de la década de los 2000, más de 10.000 millones para el fortalecimiento de capacidades militares y lucha antinarcóticos. ⁸⁷ En conclusión, un elenco de factores que permite que, desde febrero de 2002, una vez roto el proceso de diálogo, la posición del Estado para enfrentar a la guerrilla nada tenga que ver con cualquier momento pasado.

La Política de Seguridad Democrática: el cambio en la correlación de fuerzas

En agosto de 2002 toma posesión como presidente de Colombia Álvaro Uribe. Lo hace recurriendo a un discurso de confrontación directa y derrota militar frente a las guerrillas, aprovechando la proximidad al código geopolítico estadounidense tras los atentados del 11-S. ⁸⁸ Así, el problema de Colombia no es de un conflicto armado *per se*, y sí más una cuestión de narcoterrorismo. Algo que exige priorizar, ante todo, la cuestión de la seguridad, a expensas de militarizar todos los espectros de la vida política y social colombiana. Tales son las palabras de Álvaro Uribe al ser preguntado por ello:

Yo nunca hablé ni utilicé la palabra conflicto. La palabra conflicto aplica a la disputa entre insurgencias y dictaduras. Entre guerrillas y sistemas no democráticos. En Colombia siempre ha habido una democracia sólida, desafiada por

⁸⁴ Eduardo PIZARRO: op.cit., p. 264.

⁸⁵ Daniel PÉCAUT: “Les FARC: longévité, puissance militaire, carences politiques”, *Herodote*, 123:4 (2006), pp. 9-40.

⁸⁶ Jerónimo RÍOS: op.cit., p. 296.

⁸⁷ Jerónimo RÍOS: “Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas”, *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 1:1 (2015), pp. 63-83.

⁸⁸ Heriberto CAIRO: *Las guerras virtuosas de George W. Bush*, Madrid, Trama, 2018.

grupos que terminaron reducidos a narcoterrorismo. Tampoco he utilizado nunca el concepto de guerra porque el problema nuestro. En Colombia, era un problema de orden público. Nosotros lo que teníamos que hacer era garantizar seguridad y velar por un cumplimiento con el ciudadano. Esto se hizo con base en tres ejes: seguridad, inversión y política social.⁸⁹

Durante sus dos presidencias se invierte más que nunca en la dimensión militar del Estado. Se mantiene inalterado un gasto del PIB del 4% en seguridad y defensa, y a ello se suman varios miles de millones de dólares provenientes del Plan Colombia.⁹⁰ Se parte del proceso de transformación y modernización que había impulsado Andrés Pastana sobre aspectos de modernización, coordinación, organización e intercambio de inteligencia entre Policía y Ejército. Las capacidades de combate aéreo y nocturno se fortalecen notablemente y el número de efectivos de Policía y Ejército se eleva, de 313.000 en 2002, a 430.000 en 2010.⁹¹ Se crean más de 400 estructuras operativas en el Ejército y más de 330 estaciones y subestaciones de policía⁹² que, en suma, permiten pasar de los 2.600 operativos militares registrados entre 1998 y 2002, a casi 4.500 entre 2003 y 2005.⁹³

Aunque las FARC-EP asumen una estrategia de confrontación total entre 2003 y 2005, alcanzando casi las tres mil acciones armadas, ésta se va rápidamente diluyendo, como igual sucede al ELN. La respuesta del Estado y la afectación sobre algunos enclaves concretos del paramilitarismo⁹⁴ merman notablemente sus capacidades, hasta el punto de que para el año 2007 las acciones de las FARC-EP son poco más de 400 en 152 municipios, a las que se suman 23 acciones del ELN sobre 18 municipios.⁹⁵ En estos años es por primera vez que, en su historia, las FARC-EP sufren bajas en su comandancia, como es el caso de “Iván Ríos”, “Raúl Reyes”, “Negro Acacio” o “Martín Caballero”.

Aun con todo tipo de excesos por parte de la Política de Seguridad Democrática, la correlación de fuerzas, tras ocho años, resulta claramente favorable al Estado. Las FARC-EP, de 2002 a 2010, pasan de 18.000 efectivos a poco más de 8.000, y su control territorial se ve reducido a la mitad, sobre poco más de 150 municipios.⁹⁶ El ELN pasará

⁸⁹ Álvaro URIBE VÉLEZ, entrevista de los autores, Bogotá, junio de 2015.

⁹⁰ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: *Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*, Bogotá, 2010.

⁹¹ *Ibidem*, p. 8.

⁹² Alfredo RANGEL y Pedro MEDELLÍN: *La Política de Seguridad Democrática*, Bogotá, Norma, 2010.

⁹³ ODHDIH: *Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998- 2012 y 2015*, Bogotá, Vicepresidencia de la República, s.f.

⁹⁴ Una vez que el poder militar y territorial del Estado se consolida en términos militares, el paramilitarismo se desmonta a través de la controvertida Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005, a la que se acogen más de 31.000 personas.

⁹⁵ ODHDIH: *op.cit.*, s.p.

⁹⁶ *Ibidem*, s.p.

de 5.500 efectivos a menos de 1.800,⁹⁷ los cuales se concentran en apenas 30 municipios. En ambos casos, la geografía de la violencia se redefine a ciertos enclaves específicos, de marcada condición periférica, como es el caso del nororiente colombiano, sobre los departamentos de Arauca y Norte de Santander; el sur y suroccidente del país, en Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, al margen de otro departamento, profundamente violento, con dinámicas propias, como es Antioquia.⁹⁸ A tal efecto, cabe destacar las siguientes palabras de un excomandante de las FARC-EP entrevistado:

La guerra se perdió en el Caguán por estrategia [...] Yo se lo decía al “Mono” y este me subestimaba. El nuevo ejército que se construyó en Colombia no se creyó que fuera tan fuerte como para destrozarnos nuestros bloques móviles. Acabaron con nosotros [...] Fue llegar Uribe y todo fue a peor. Con él estaban los paras, pero también había un ejército preparado como nunca antes. Yo lo viví en carne propia. La solución pasaba por ser fuertes donde al Estado le quedaba más difícil [...] El coste de la renuncia fue muy alto.⁹⁹

Dicho de otro modo, durante los ocho años de presidencia de Álvaro Uribe puede decirse que se produce un debilitamiento sin retorno de las FARC-EP, y también del ELN, que obliga a replantear los términos del conflicto, nuevamente, a enclaves periféricos, pero sobre la base de un Estado prevalente en términos militares. A partir de entonces, es que la confrontación se torna cada vez más sobre enclaves fronterizos, coca-leros y con escasa presencia del Estado que, si bien evidencian la derrota estratégica de la guerrilla, no termina por traducirse en una victoria militar del Estado.¹⁰⁰

La presidencia de Juan Manuel Santos: Acuerdo de Paz y desaparición de las FARC-EP

Dadas las circunstancias descritas, la llegada de Juan Manuel Santos representa un viraje de 180° con respecto a la política de seguridad y la gestión del conflicto armado llevada a cabo por su antecesor. Es cierto que ordena dos operativos que implican la muerte tanto del líder militar de las FARC-EP, “Mono Jojoy” (Operación Sodoma, septiembre de 2010) y de su comandante jefe, “Alfonso Cano” (Operación Odiseo, noviembre de 2011). Sin embargo, desde el mes de marzo de 2011 ordena a su Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, la exploración de un posible diálogo con la guerrilla. A la par, retoma las buenas relaciones con Ecuador y Venezuela, altamente erosionadas bajo la

⁹⁷ Jerónimo RÍOS: *Historia de la violencia en Colombia...*, op.cit., p. 383.

⁹⁸ ODHDIH, op.cit., s.p.

⁹⁹ ANÓNIMO, Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, entrevista de los autores, Bogotá, junio de 2019.

¹⁰⁰ Jerónimo RÍOS: “La periferalización del conflicto armado colombiano, 2002-2014”, *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, 7:2 (2016), pp. 251-275.

presidencia anterior, aun cuando mantiene una alta intensidad en lo que a operativos militares se refiere. En otras palabras, el conflicto armado se había enquistado y a pesar de que la correlación de fuerzas era claramente favorable al Estado, las FARC-EP, y en menor medida el ELN, se habían consolidado sobre bastiones territoriales periféricos y fronterizos en donde la confrontación resultaba mucho más compleja. Baste recordar que en el año 2012 se llegaron a contabilizar hasta 824 acciones de las FARC-EP, con especial virulencia en los entornos fronterizos del nororiente, el suroccidente y el sur del país.¹⁰¹

El conflicto armado se encontraba próximo a una situación de mutuo empate negativo, en donde, a diferencia de 1998, una solución negociada ofrecía beneficios compartidos al Estado y a la guerrilla.¹⁰² Esto queda reflejado en el comienzo del proceso de diálogo, a finales de 2012, y especialmente en los puntos fijados en la agenda de negociación. Seis puntos claramente definidos en torno a: la reforma rural integral; la participación política; el fin del conflicto; la solución al problema de las drogas ilícitas; las víctimas y, finalmente; la refrendación, implementación y verificación. Sobre cómo es interiorizada por las FARC-EP resultan ilustrativas las palabras de uno de sus más reconocidos comandantes, como es el caso de “Pablo Catatumbo”:

La firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP constituye tal vez el mayor acontecimiento político de mayor importancia para la vida en nuestro país en el siglo XX [...] El haber puesto fin a esa guerra que, en el caso de las FARC-EP, la cual ya iba sumando 53 años, supone poner fin una guerra que fue muy fuerte, muy cruda en los últimos años muy dura [...] Significa un hecho trascendental para la política y para la sociedad colombiana [...] Es la esperanza para la prosperidad de este pueblo.¹⁰³

De otro lado, la experiencia de la veteranía resultaba evidente. Se internacionaliza el proceso, con una fase inicial que transcurre en Oslo y que después se traslada a La Habana, involucrando a países facilitadores, Chile y Noruega de lado del gobierno, y Cuba y Venezuela, del lado de las FARC-EP.¹⁰⁴ De igual forma, los perfiles negociadores exhibían un claro talante negociador. En el caso de la guerrilla, integrando a comandantes de bloques menos beligerantes, como “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” (Bloque Caribe), “Pablo Catatumbo” (Bloque Occidental) o “Pastor Alape” (Bloque Magdalena Medio). Por su parte, el equipo negociador del gobierno, igualmente, exhibía

¹⁰¹ ODHDIH, op. cit., s.p.

¹⁰² Saadia TOUVAL y William ZARTMAN: *International Mediation in Theory and Practice*, Boulder, Westview, 1985.

¹⁰³ ‘Pablo CATATUMBO’, entrevista de los autores, Bogotá, febrero de 2021.

¹⁰⁴ Humberto DE LA CALLE: *Revelaciones al final de una guerra: Testimonio del jefe negociador del gobierno colombiano en La Habana*, Bogotá, Debate, 2019.

buenos oficios, con el liderazgo de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, además de incorporar a dos mayores generales en retiro, uno del Ejército (Jorge Enrique Mora) y otro de la Policía Nacional (Óscar Naranjo), además de Luis Carlos Villegas, muy próximo al gremio empresarial, y Frank Pearl (con experiencia dilatada en diversas iniciativas de construcción de paz en Colombia).

Más allá de situaciones puntuales de crisis, inherentes a todo proceso de estas características, el proceso de diálogo, no sin dificultades y con un plebiscito fallido entre medias, consiguió firmarse el 24 de noviembre de 2016. Esto, en un marco de confianza, favorecido por la estrategia de comunicados conjuntos ante la prensa, que limitaba el alcance de posibles desinformaciones –y que motivó la firma conjunta de hasta 109 comunicados conjuntos,¹⁰⁵ y un *desescalamiento* de las hostilidades, evidente, por ejemplo, con las apenas 94 acciones armadas realizadas por las FARC-EP en 2015,¹⁰⁶ o la reducción de víctimas mortales producidas por el conflicto armado, del medio millar de 2012, a menos de diez en 2016. El siguiente paso sería la desmovilización íntegra de la guerrilla, formada por algo más de 7.000 combatientes, a mediados de 2017, abriendo una nueva etapa del conflicto armado colombiana en donde las FARC-EP desaparecen como tal.

Conclusiones

Llegados a este punto es que cabe apreciar las importantes diferencias existentes entre el proceso de violencia política y la respuesta del Estado en los casos de Uruguay y Colombia. Pudiera pensarse que en el primero de los casos la idiosincrasia urbana y el recelo al uso de la violencia, sumado a la ausencia de recursos para la confrontación armada, fueron factores que permitieron la derrota del MLN-T, incluso, antes del golpe de 1973. Estos elementos, sumados a una ideología de fuerte base nacionalista y popular, pero alejada de la ortodoxia comunista, imprimieron una huella de aceptación en el imaginario colectivo uruguayo de tal manera que, una vez que retorna la democracia, en 1985, y desde mediados de los noventa, el MLN vuelve a quedar incluido en el Frente Amplio. Un factor nada baladí que espolea a parte de los otrora tupamaros, como José Mujica o Eleuterio Fernández Huidobro, para encabezar la coalición de gobierno que vence electoralmente, de forma sucesiva, entre 2005 y 2020.

Todo lo contrario sucede con las FARC-EP. Su ingente poder militar, fortalecido, en buena parte por el recurso cocalero, y su arraigo en escenarios casi inhóspitos para el Estado, en muchas ocasiones, facilitó su longevidad y su resistencia frente a las diferentes políticas de seguridad y los sucesivos intentos de diálogo que comienzan en 1984.

¹⁰⁵ Jerónimo RÍOS: “From war to peace: Understanding the end of the armed conflict in Colombia”, *Rationality and Society*, 30:4 (2018) pp. 463-490.

¹⁰⁶ ODHDIH, op.cit., s.p

Con una ideología más a la izquierda que los tupamaros, pero mucho menos sólida, hay que añadir una falta de legitimidad en la población civil, lo cual se traduce, no sólo en la derrota plebiscitaria de consulta sobre el Acuerdo, en octubre de 2016, sino en los apenas 50.000 votos que obtuvieron en las elecciones legislativas de 2018. Mientras que en el caso uruguayo la derrota militar, con el paso del tiempo, quedó superada por una victoria político-electoral, en el ámbito de las FARC-EP, que no llegaron a ser derrotadas militarmente y que firmaron un Acuerdo de Paz, sucede una trayectoria político-electoral muy diferente.

Igualmente, y como se ha podido ver, en el caso del MLN-T su surgimiento acontece en la democracia más estable del continente, en los años sesenta, mientras que en Colombia, más allá de una concepción reduccionista y electoral, la democracia como tal resultaba tan excluyente como cuestionable. Del mismo modo, mientras que el ciclo de violencia política apenas dura una década en Uruguay, y su capacidad de destrucción es tan reducida como apenas reducible al periodo que transcurre entre 1970 y 1972, en el caso de las FARC-EP existen claras diferencias. Tanto por la longevidad y la capacidad militar y económica que permite a la guerrilla enfrentar durante un largo tiempo al Estado colombiano, como por su desactivación en un contexto democrático y por medio de un Acuerdo de Paz.

Ambos procesos dejan abierta innumerables posibilidades para la comparación con otras de las muchas experiencias guerrilleras acontecidas en América Latina, que escasamente se abordan desde la perspectiva comparada y que ofrecen trayectorias, idiosincrasias, repertorios de acción o relaciones con la democracia muy particulares. También, por el lado de los aspectos comunes, pueden ser estudiadas las relaciones con Cuba, el sentido de las relaciones exteriores o la redefinición de los postulados ideológicos a propósito de los cambios en las condiciones de la confrontación armada. Al respecto, la multitud de documentos existentes en los archivos estadounidenses, uruguayos y colombianos, además de las historias de vida que aún hoy se pueden obtener, ofrecen un universo de fuentes que debe seguir analizándose para con un objeto de estudio que, aún hoy, ofrece grandes posibilidades de exploración y aprendizaje.